

Bogotá, D. C., 07 de septiembre de 2021

Doctor

Jennifer Kristin Arias Falla

Presidenta Plenaria Cámara de Representantes

Ciudad

Asunto: **Proposición de modificación**

Respetada Señora presidenta,

Con fundamento en lo contemplado en la Ley 5ta de 1992 y normas concordantes, se presenta ante la Plenaria de la Cámara de Representantes, proposición de modificación al artículo 2º del Proyecto de Ley No. 027 de 2021 Cámara -046 de 2021 Senado *"Por medio del cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones"*. El cual quedará así:

ARTÍCULO 2º. IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA. Créase para el año 2022 el impuesto de normalización tributario como un impuesto complementario al impuesto sobre la renta, el cual estará a cargo de los contribuyentes del impuesto sobre la renta de regímenes sustitutivos del impuesto sobre la renta, que tengan activos omitidos o pasivo inexistentes.

El impuesto complementario de normalización tributaria se causa por la posesión de activos omitidos o pasivos inexistentes a 1º de enero del año 2022.

(...)

Parágrafo nuevo. El Gobierno Nacional destinará un porcentaje no menor al diez por ciento (10%) del total de los ingresos por concepto del impuesto de normalización tributaria, para financiar gastos de inversión

en educación básica, media y superior de los departamentos y municipios de difícil acceso del país.

Adiciónese los apartes en negrilla y subrayados.

Atentamente,



JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ

Representante a la Cámara, Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Partido Cambio Radica

MÉNDEZ
EMPECEMOS LA TRANSFORMACIÓN

MOTIVACIÓN

La disparidad entre los centros urbanos del país y las regiones más apartadas, no solo desde la perspectiva geográfica sino desde el punto de vista del acceso a bienes y servicios, es una realidad en Colombia y la falta de disponibilidad de programas educativos en todos los niveles la reproduce la brecha en cobertura y calidad entre las zonas rurales y urbanas es notable. Los efectos de esa brecha han sido reconocidos por la UNICEF y la CEPAL que han denunciado en América Latina la falta de oportunidades educativas. En Colombia, la reducida respuesta estatal a la demanda educativa en zonas rurales, tiene una estrecha relación con el desarrollo en general y con la vida de los niños y jóvenes en particular. Esa reacción estatal ineficiente también ha sido conocida por esta Corte en sede de revisión, especialmente en relación con la falta de condiciones y recursos (físicos y humanos) para la prestación del servicio educativo en zonas apartadas en los niveles básicos de formación. La situación permite concluir que los deberes estatales en la materia implican, en aras de la disponibilidad y la accesibilidad, procurar que las condiciones geográficas de determinada zona, no impidan la formación escolar y esta pueda concretarse sin distinciones respecto a los centros geográficos. (Sentencia C-535 de 2017 Corte Constitucional)

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario asegurar al menos el 10% de los recursos recaudados con el impuesto de normalización para la educación en todos los niveles de los departamentos y municipios que se encuentran en zonas de difícil acceso, tal es el caso del Departamento Archipiélago de San Andrés, providencia y Santa Catalina.